

Carta abierta: Nicaragua, derechos humanos en crisis

Llamado urgente a la acción de la Unión Europea

En el marco del 6to aniversario del estallido social en Nicaragua, la [Red EULAT](#), red pluralista de más de 40 movimientos y organizaciones europeas que promueven la solidaridad entre los pueblos de América Latina y de Europa, con apoyo de las organizaciones abajo firmantes, se dirige respetuosamente a las instituciones y representantes de la Unión Europea.

Nicaragua, desde abril de 2018, está inmersa en una profunda crisis política y de derechos humanos, desencadenada por la respuesta violenta del gobierno de Daniel Ortega a las manifestaciones pacíficas autoconvocadas por la ciudadanía. Lo que comenzó como una protesta legítima contra las pretendidas reformas al sistema de pensiones y la desprotección a la Reserva Indio Maíz, pronto se convirtió en un movimiento nacional de indignación ante la represión gubernamental, la corrupción sistémica y la violación de derechos fundamentales.

La brutal represión desatada por el régimen de Ortega dejó un saldo devastador: más de 350 personas asesinadas, miles de personas encarceladas injustamente, y casi medio millón de personas obligadas al exilio que se han visto obligadas a solicitar asilo en terceros países. Esto ha derivado en un clima de censura, represión y miedo que ha cerrado el espacio cívico y paralizado cualquier manifestación de disidencia dentro del país.

Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han documentado denuncias que muestran un patrón sistemático de graves abusos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones de carácter sexual, detenciones arbitrarias, persecución a opositores, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Más de 300 personas nicaragüenses han sido despojadas de su nacionalidad y sus bienes han sido confiscados. Asimismo no se ha permitido la entrada al país de al menos 145 personas, quedando éstas en condición de destierro.

En lugar de buscar soluciones a la crisis en el marco del diálogo tantas veces reclamado por la comunidad internacional, el gobierno de Daniel Ortega ha optado por sostener y profundizar una estrategia de confrontación, persecución y represión, socavando así los pilares fundamentales de la democracia y el Estado de derecho. La falta de voluntad política para reconocer las demandas legítimas del pueblo nicaragüense y la persistente impunidad con que se continúan cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, amenazan con cronificar y profundizar la crisis política, social y humanitaria que vive el país.

En este contexto de afianzamiento de un régimen dictatorial, reiteramos nuestra profunda preocupación por la situación que vive este país. Recordamos que la situación de deterioro democrático en Nicaragua, así como en otros países centroamericanos es crítica también para los intereses europeos en la región. Como sociedad civil europea, apelamos a los principios y valores fundantes de la Unión Europea, y a su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. En consecuencia, urgimos a sus instituciones a apoyar a la sociedad civil nicaragüense en su defensa incansable, determinada y en gran medida desde el exilio por la justicia, la libertad y la democracia en este país.

Con el apoyo de:

Open letter: Nicaragua, human rights in crisis

Urgent call to action from the European Union

Within the framework of the 6th anniversary of the social uprising in Nicaragua, the [EULAT Network](#), a pluralist network of more than 40 European movements and organizations that promote solidarity between the peoples of Latin America and Europe, with the support of the undersigned organizations, would like to draw the attention of the institutions and representatives of the European Union to the following facts:

Since April 2018, Nicaragua has been immersed in a deep political and human rights crisis, triggered by the violent response of Daniel Ortega's government to peaceful citizens' demonstrations. What began as a legitimate protest against the proposed reforms to the pension system and the lack of protection of the Indio Maíz Reserve, soon became a national movement of indignation against the government's repression, systemic corruption and continuous violations of fundamental rights.

The brutal repression unleashed by the Ortega regime left a devastating toll: more than 350 people murdered, thousands of people unjustly imprisoned, and almost half a million people forced into exile and obliged to request asylum in third countries. This has resulted in an environment of censorship, repression and fear that has closed civil society space and paralyzed any manifestation of dissent within the country.

Local and international human rights organizations have documented a systematic pattern of serious abuses, including extrajudicial executions, torture, sexual assaults, arbitrary detentions, and persecution of opponents, journalists, and human rights defenders. More than 300 Nicaraguans have been stripped of their nationality and their assets have been confiscated. Likewise, at least 145 people have been refused entrance to their country, leaving them in exile.

Instead of seeking solutions to the crisis through dialogue, which has been so often demanded by the international community, the government of Daniel Ortega has chosen to sustain and deepen a strategy of confrontation, persecution and repression, thus undermining the fundamental pillars of democracy and rule of law. The lack of political will to recognize the legitimate demands of the Nicaraguan people and the persistent impunity for serious violations of human rights threaten to perpetuate and deepen the political, social and humanitarian crisis that the country is undergoing.

In this context of consolidation of a dictatorial regime in Nicaragua, we reiterate our deep concern about the situation in this country. We recall that the democratic deterioration in Nicaragua, as well as in other Central American countries, is also critical for European interests in the region. As European civil society, we appeal to the founding principles and values of the European Union, and its commitment to the promotion and protection of human rights, democracy and the rule of law. Thus, we urge its institutions to support the Nicaraguan civil society, largely from exile, in its tireless, determined defense of justice, freedom and democracy in this country.

With the support of: